

Doctora

BERTHA LUCY CEBALLOS POSADA

Magistrada Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Sección Tercera – Subsección A

Rad.: 25000233600020230027600

Actor: Incubadora Santander S.A.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros

Medio de control: Reparación directa

DIANA JULIET BLANCO BERBESI, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.090.419.440 expedida en Cúcuta y portadora de la T.P No. 238. 611 del C.S de la J, actuando en la calidad de profesional de defensa de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**, me permito realizar contestación de la demanda de acuerdo con las siguientes consideraciones:

I. HECHOS

Hecho 1: En relación con lo expuesto, esta defensa tendrá por cierto lo referente al inicio del desarrollo de diferentes movilizaciones en ejercicio de la protesta social, por parte de las principales organizaciones y centrales obreras de Colombia, durante el mes de abril del año 2021.

Hecho 2: Es parcialmente cierto, teniendo en cuenta que, si bien de una parte está acreditado lo referente a la jornada de protesta social desarrollada en Colombia desde el día 28 de abril de 2021, y las consecuencias causadas por los actos de tipo vandálico y terrorista perpetrados en medio de las manifestaciones. De otra parte, no se encuentra demostrado que la Fuerza Pública en cabeza del Ejército Nacional haya desatendido su deber funcional en cumplimiento de la misión constitucional que le asiste.

Hechos 3 y 4: Al respecto, esta defensa no desconoce las consecuencias adversas generadas por las afectaciones presentadas a causa de la alteración del orden público en desarrollo de diferentes movilizaciones que se adelantaban en ejercicio de la protesta social en el país. Sin embargo, se limita a las resultas probatorias del proceso sobre el particular, en lo que respecta a los perjuicios de la industria avícola del país; máxime que en ello no tuvo injerencia alguna acción u omisión del Ejército Nacional.

Hecho 5: Es cierto, conforme se puede validar en el link señalado en la demanda, donde se indica: “*Presidente Duque le solicita al Congreso retirar el proyecto de ley de Solidaridad Sostenible y tramitar uno nuevo, fruto de consensos y que evite incertidumbre financiera.*”

Hecho 6: Es cierto, al corresponder a la realidad del orden político que vivía el país para la fecha 3 de mayo de 2021.

Hecho 7: Al respecto, respecto, esta defensa no desconoce las consecuencias adversas generadas por las afectaciones presentadas a causa de la alteración del orden público en desarrollo de diferentes movilizaciones que se adelantaban en ejercicio de la protesta social en el país. Sin embargo, se limita a las resultas

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 oficina 358, complejo Fortaleza Ejército Nacional - Bogotá, D.C.

Teléfono: 3123152205

Mensajería Electrónica: dianablanca03@hotmail.com– diana.blanco@buzonejercito.mil.co

probatorias del proceso sobre el particular, en lo que respecta a los perjuicios sufridos por la industria avícola del país; máxime que en ello no tuvo injerencia alguna acción u omisión del Ejército Nacional.

Hechos 8, 9 y 10: Sobre el particular, debe indicarse que, si bien por parte de FENAVI, Incubadora Santander, Pronávicola, se expresó lo relacionado con las afectaciones sufridas por la industria avícola a causa de las dificultades generadas por la alteración del orden público en medio de la protesta social presentada para la fecha de los hechos. Esto no resulta prueba suficiente para acreditar plenamente un daño antijurídico; y en tal sentido deberá aportarse los elementos de juicio que validen lo expuesto.

Hecho 11: Es cierto que el día 05 de mayo de 2021, quedó retirada oficialmente la propuesta de Ley de Solidaridad Sostenible, luego de que las comisiones conjuntas económicas de Cámara y Senado aprobaran la eliminación de su trámite. El retiro se oficializó tres días después de que el presidente Iván Duque le pidiera al Congreso que no se tramitara y se retirara de la agenda legislativa.

Hecho 12: Es cierto, al corresponder a la realidad del orden político y social que vivía el país para la fecha 5 de mayo de 2021.

Hecho 13: Se tiene por cierto lo referente a que el día 05 de mayo de 2021, en el marco de corredores humanitarios, tras 8 días de bloqueos en las vías, a la ciudad de Cali empezaron a ingresar los primeros suministros de alimentos y combustibles, que eran transportados en camiones custodiados por la Fuerza Pública en cabeza del Ejército Nacional. Lo expuesto por el jefe de precios de la Central de Abastecimiento de Valle -CAVASA-, se considera que corresponden a apreciaciones subjetivas y por lo tanto deberán fundarse a través de otros medios de prueba.

Hechos 14 y 15: Al respecto, esta defensa no desconoce las consecuencias adversas generadas por las afectaciones presentadas a causa de la alteración del orden público en desarrollo de diferentes movilizaciones que se adelantaban en ejercicio de la protesta social en el país. Sin embargo, se limita a las resultas probatorias del proceso que se den sobre el particular; por cuanto lo expuesto corresponde a declaraciones y notas periodísticas, que deberán acompañarse de plena prueba para su acreditación.

Hecho 16: Es cierto, como quiera que el Senado de la República, promovió encuentro entre el Gobierno Nacional y el comité nacional del paro.

Hechos 17 a 22: Al respecto, esta defensa no desconoce las consecuencias adversas generadas por las afectaciones presentadas a causa de la alteración del orden público en desarrollo de diferentes movilizaciones que se adelantaban en ejercicio de la protesta social en el país. Sin embargo, se limita a las resultas probatorias del proceso, por cuanto lo expuesto corresponde a declaraciones y notas periodísticas, que deberán acompañarse de plena prueba para su acreditación, por cuanto las solas afirmaciones no son suficiente para acreditar plenamente un daño antijurídico en relación con los demandantes.

Hecho 23: Es cierto que el día 10 de mayo de 2021, el gobierno se reunió con el comité Nacional de Paro, en un encuentro en el que se reiteró la voluntad de diseñar

acuerdos y soluciones con el fin de lograr un consenso y respuestas rápidas y necesarias para el beneficio de los colombianos. Sin embargo, no se logró un acuerdo para finalizar las movilizaciones.

Hechos 24 y 25: Sobre el particular, debe indicarse que, si bien por parte de FENAVI, Incubadora Santander, Pronávicola, se expresó lo relacionado con las afectaciones sufridas por la industria avícola a causa de las dificultades generadas por la alteración del orden público en medio de la protesta social presentada para el mes de mayo de 2021. Esto no resulta prueba suficiente para acreditar plenamente un daño antijurídico respecto la parte actora; y en tal sentido deberá aportarse los elementos de juicio que validen lo expuesto.

Hecho 26: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 27: Al respecto, esta defensa no desconoce las consecuencias adversas generadas por las afectaciones presentadas a causa de la alteración del orden público en desarrollo de diferentes movilizaciones que se adelantaban en ejercicio de la protesta social en el país. Sin embargo, se limita a las resultas probatorias del proceso, por cuanto lo expuesto corresponde a declaraciones y notas periodísticas, que deberán acompañarse de plena prueba para su acreditación, por cuanto las solas afirmaciones no son suficientes para acreditar plenamente un daño antijurídico frente a la parte actora.

Hechos 28, 29 y 30: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 31: Esta defensa tiene por cierto, lo expresamente manifestado el 16 de mayo de 2021 por el Consejo Gremial Nacional, en relación con el diálogo que adelantaba el Gobierno Nacional con los distintos actores de la movilización iniciada el 28 de abril de 2021.

Hecho 32: Al respecto, esta defensa no desconoce las consecuencias adversas generadas por las afectaciones presentadas a causa de la alteración del orden público en desarrollo de diferentes movilizaciones que se adelantaban en ejercicio de la protesta social en el país. Sin embargo, se limita a las resultas probatorias del proceso, por cuanto lo expuesto corresponde a declaraciones y notas periodísticas, que deberán acompañarse de plena prueba para su acreditación, por cuanto las solas afirmaciones no son suficientes para acreditar plenamente un daño antijurídico frente a la parte actora.

Hecho 33: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 34: Esta defensa limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto. Sin embargo, se precisa que, no está sumariamente probado que la Fuerza Pública en cabeza del Ejército Nacional haya desatendido su deber funcional en cumplimiento de la misión constitucional que le asistía en medio la alteración del orden público que se presentaba en el desarrollo de diferentes movilizaciones adelantadas en ejercicio de la protesta social en el país

Hechos 35 y 36: Sobre el particular, debe indicarse que, si bien se señalaron las afectaciones sufridas por la industria avícola a causa de las dificultades generadas por la alteración del orden público en medio de la protesta social presentada para el mes de mayo de 2021. Esto no resulta prueba suficiente para acreditar plenamente un daño antijurídico respecto la parte actora; y en tal sentido deberá aportarse los elementos de prueba que validen lo expuesto.

Hecho 37: Esta defensa se limita a tener por cierto, lo consignado en el oficio de 20 de mayo de 2021 con referencia “*Solicitud urgente para generar un corredor vial desde Buenaventura a Mediacanoa*”, suscrito por el presidente ejecutivo de FENAVI, la directora ejecutiva de FENAVI VALLE, gerente de Santa Anita-Nápoles, gerente Incubadora Santander, gerente de Nutriavícola Huevos Oro y el gerente de Pronavícola.

Hecho 38: Esta defensa se limita a tener por cierto, lo señalado en el oficio de 21 de mayo de 2021, suscrito por los Comités Intergremiales del Valle del Cauca y Nariño y el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca.

Hecho 39: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 40: Sobre el particular, debe indicarse que, si bien se señalaron las afectaciones sufridas por la industria avícola a causa de las dificultades generadas por la alteración del orden público en medio de la protesta social presentada para el mes de mayo de 2021. Esto no resulta prueba suficiente para acreditar plenamente un daño antijurídico respecto la parte actora; y en tal sentido deberá aportarse los elementos de prueba que validen lo expuesto.

Hecho 41: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 42: Al respecto, esta defensa no desconoce las consecuencias adversas generadas por las afectaciones presentadas a causa de la alteración del orden público en desarrollo de diferentes movilizaciones que se adelantaban en ejercicio de la protesta social en el país. Sin embargo, se limita a las resultas probatorias del proceso sobre el particular, para acreditar plenamente un daño antijurídico frente a la parte actora; máxime que, esta sumariamente demostrado los esfuerzos realizados por el gobierno nacional, la Fuerza pública y diferentes órganos del Estado para el restablecimiento del orden y superación de la crisis presentada.

Hecho 43: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 44: Esta defensa se limita a tener por cierto, lo señalado en el documento denominado: “*Alerta humanitaria por colapso en seguridad alimentaria del país.*” emitido por la Defensoría del Pueblo, que data del año 2021.

Hechos 45 y 46: Sobre el particular, debe indicarse que, si bien por parte de FENAVI, y medios de comunicación se señaló lo relacionado con las afectaciones sufridas por la industria avícola a causa de las dificultades generadas por la alteración del orden público en medio de la protesta social presentada para el mes de mayo de 2021. Ello, corresponde a declaraciones y notas periodísticas, que

deberán acompañarse de plena prueba para su acreditación, por cuanto las solas afirmaciones no son suficientes para acreditar plenamente un daño antijurídico frente a la parte actora.

Hecho 47: Esta defensa se limita a tener por cierto, lo señalado en el documento denominado circular externa No. 0032 del 20 de mayo de 2021, por medio de la cual la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca proveyó lineamientos, recomendaciones y restricciones frente al manejo de la mortalidad de aves y su adecuada disposición final, generada por el Paro Nacional. Así mismo, a lo expuesto por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca referente a “¿Qué hacer frente a la mortalidad de aves por bloqueos en vías nacionales?”.

Hecho 48: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 49: Sobre el particular, debe indicarse que, si bien por parte de FENAVI, se señaló lo relacionado con las afectaciones sufridas por la industria avícola a causa de las dificultades generadas por la alteración del orden público en medio de la protesta social presentada para el mes de mayo de 2021. Ello, corresponde a declaraciones que deberán acompañarse de plena prueba para su acreditación, por cuanto las solas afirmaciones no son suficientes para acreditar plenamente un daño antijurídico frente a la parte demandante.

Hecho 50: Es cierto, al ser un hecho ocurrido en la realidad política de Colombia en la fecha 27 de mayo de 2021. Sin embargo, se deja claro por esta defensa que, no está sumariamente probado que la Fuerza Pública en cabeza del Ejército Nacional haya desatendido su deber funcional en cumplimiento de la misión constitucional que le asistía en medio la alteración del orden público que se presentaba en el desarrollo de diferentes movilizaciones adelantadas en ejercicio de la protesta social en el país

Hecho 51: Sobre el particular, debe indicarse que, si bien por parte de empresarios y medios de comunicación se señaló lo relacionado con las afectaciones sufridas por la industria avícola a causa de las dificultades generadas por la alteración del orden público en medio de la protesta social presentada para el mes de mayo de 2021. Ello corresponde a declaraciones y notas periodísticas, que deberán acompañarse de plena prueba para su acreditación, por cuanto las solas afirmaciones no son suficientes para acreditar plenamente un daño antijurídico frente a la parte actora.

Hecho 52: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 53: Este extremo procesal se limita a tener por cierto lo expresamente señalado en el Decreto No. 575 de 28 de mayo de 2021 “*Por el cual se impartieron instrucciones para la conservación y restablecimiento del orden público*”, expedido por el Presidente de la República y el Ministerio del Interior.

Hecho 54: Sobre el particular, debe indicarse que, si bien por parte de empresarios y medios de comunicación se señaló lo relacionado con las afectaciones sufridas por la industria avícola a causa de las dificultades generadas por la alteración del orden público en medio de la protesta social presentada para el mes de mayo de

2021. Ello corresponde a declaraciones y notas periodísticas, que deberán acompañarse de plena prueba para su acreditación, por cuanto las solas afirmaciones no son suficientes para acreditar plenamente un daño antijurídico frente a la parte actora.

Hechos 55, 56 y 57: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 58: Es cierto, al ser un hecho ocurrido en la realidad política de Colombia en la fecha 27 de mayo de 2021. Sin embargo, se deja claro por esta defensa que, no está sumariamente probado que la Fuerza Pública en cabeza del Ejército Nacional haya desatendido su deber funcional en cumplimiento de la misión constitucional que le asistía en medio la alteración del orden público que se presentaba en el desarrollo de diferentes movilizaciones adelantadas en ejercicio de la protesta social en el país.

Hecho 59: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 60: Este extremo procesal se limita a tener por cierto lo expresamente señalado en el informe de observaciones y recomendaciones al Estado colombiano, resultado de la visita de trabajo realizada del 8 al 10 de junio de 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hechos 61 a 64: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto.

Hecho 65: Este extremo procesal se limita a tener por cierto lo expresamente señalado en la Ley 2155 “*Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones*”, expedida el 14 de septiembre de 2021

Hecho 66: Este extremo procesal se limita a tener por cierto lo expresamente señalado en la Resolución 2474 “*Por medio de la cual se define la metodología de cálculo de disminución en ingresos de los beneficiarios del Programa de Apoyo a empresas afectadas por el Paro Nacional, los plazos de postulación, los mecanismos de dispersión, y se dictan otras disposiciones*”, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Hechos 67 a 98: Este extremo procesal se limita a lo acreditado en el proceso sobre lo afirmado; conforme las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para el efecto. Bajo la salvedad que, no se considera que con lo expuesto se tenga por demostrada sumariamente la configuración de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado, esto es un daño antijurídico y su imputación al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

Hecho 99: No corresponde a un hecho propiamente, teniendo en cuenta que, alude a un medio de prueba que será objeto de contradicción conforme lo dispuesto en la ley procesal.

Finalmente, de manera general se precisa que como quiera que en su mayoría los fundamentos facticos expuestos en la demanda tienen como fuente publicaciones

periodísticas; resulta pertinente indicar que el Consejo de Estado ha dejado claro su valor probatorio en los siguientes términos¹:

“La publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. En principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez [...] Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho reportajes, noticias, crónicas, etc., en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso podría llegar a constatar la certeza de los hechos²”, que pueden o dar certeza, o no aportar a lo ya ofrecido con otros medios probatorios³ sin desecharlas de plano.”

II. PRETENSIONES

En el presente asunto, la sociedad Incubadora Santander S.A. pretende que se declare la responsabilidad patrimonial, entre otros, de la Nación –Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por la omisión de sus deberes de mantenimiento y/o preservación del orden público ante los bloqueos viales que se presentaron en los Departamentos del Valle y Cauca durante el Paro Nacional ocurrido desde el 28 de abril al 04 de junio de 2021; lo que habría alterado la producción económica de la sociedad demandante.

Conforme lo anterior, este extremo procesal se opone a la prosperidad de lo pretendido, de acuerdo con los argumentos de defensa que se expondrán dentro de la presente contestación, los cuales permitirán concluir que no se configuran los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado.

III. FUNDAMENTOS DE DEFENSA

En relación con los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado tenemos:

A. El daño

En el escrito de la demanda se indica que desde el elemento fenomenológico que el daño corresponde a: *“pérdidas derivadas de la baja producción, la mortalidad de las aves producto del desabastecimiento de insumos y alimentos a causa de los bloqueos, o la disposición final de millares de huevos que no pudieron ser transportados a sus lugares de destino, aunado a los sobrecostos en que se tuvo que incurrir para mantener la operación. A lo anterior se suman las amenazas que recibieron los trabajadores del gremio, así como a los bienes de la compañía que fueron vandalizados -por ejemplo, vehículos transportadores.”*

¹ Sentencia de la S3, Sub-sección C de 13 de junio de 2012, expediente 2011-00031.

² En similar sentido puede verse: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 25087

³ Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 6 de marzo de 2013, expediente 26694.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 oficina 358, complejo Fortaleza Ejército Nacional - Bogotá, D.C.
Teléfono: 3123152205

Mensajería Electrónica: dianablanca03@hotmail.com– diana.blanco@buzonejercito.mil.co

Al respecto esta defensa debe puntualizar que, se encuentra sumariamente acreditado que se presentó una afectación en la producción económica de la sociedad Incubadora Santander S.A. No obstante, para acreditar plenamente un daño⁴ y sea indemnizable, es indispensable verificar la configuración de los elementos que lo estructuran, es decir, que sea cierto⁵, actual⁶, real⁷, determinado o determinable⁸ y protegido jurídicamente⁹.

En síntesis, estos elementos parten de la premisa según la cual, la antijuridicidad del daño no se concreta solo con la verificación de la lesión de un derecho o de un interés legítimo, sino con los efectos derivados de la lesión que inciden en el ámbito patrimonial o extra patrimonial, los cuales son injustamente padecidos por la víctima. Razón por la que, en lo que refiere al caso particular deberá surtir el debate probatorio correspondiente.

B. De la imputación

Sobre el particular, tenemos que, en el libelo de la demanda, se señala: “*Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Ejército Nacional. Corresponde a esta Cartera Ministerial, de conformidad con el Decreto 1512 de 2000, y sin perjuicio de las demás funciones previstas en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998: (i) participar en la definición, desarrollo y ejecución de las políticas de defensa y seguridad nacionales, para garantizar la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio y el derecho de libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz; (ii) contribuir con los demás organismos del Estado para alcanzar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, obligaciones y libertades públicas; (iii) y coadyuvar al mantenimiento de la paz y la tranquilidad de los colombianos en procura de la seguridad que facilite el desarrollo económico, la protección y conservación de los recursos naturales y la promoción y protección de los Derechos Humanos.*

En el caso de autos, emerge con suficiente claridad que el Ministerio de Defensa Nacional y las fuerzas integradas en su estructura, como son las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tenían la obligación que el ordenamiento jurídico les impone de velar por la conservación y el restablecimiento del orden público, en situaciones en las que éste fuere turbado, como en efecto ocurrió. La falla en el servicio, como causa de los perjuicios irrogados, estriba no sólo en la conducta omisiva de estos actores, sino también en su funcionamiento tardío e irregular que condujo a que, en

⁴ “[D]año es toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátase de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar– se encuentran reunidos”. Tomado de: HENAO, Juan Carlos. Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el Estado. En: La responsabilidad extracontractual del Estado: ¿qué? ¿por qué? ¿hasta dónde? XVI Jornadas internacionales de derecho administrativo. Juan Carlos Henao y Andrés Fernando Ospina Garzón (editores), Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35.

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de abril de 2010, rad. 18878, reiterada por la sentencia del 1º de febrero de 2012, rad. 20505, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de marzo de 2012, rad. 20497, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia del 12 de febrero de 2014, rad. 28857, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

⁷ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2001, rad. 12555, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez

⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, rad. 18425, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 19 de mayo de 2005, rad. 2001-01541 AG, CP. María Elena Giraldo Gómez.

⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de junio 2005, rad. 1999-02382 AG, CP. María Elena Giraldo Gómez.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 oficina 358, complejo Fortaleza Ejército Nacional - Bogotá, D.C.

Teléfono: 3123152205

Mensajería Electrónica: dianablanca03@hotmail.com– diana.blanco@buzonejercito.mil.co

el marco de las manifestaciones, se presentaron más de 3.190 bloqueos, especialmente en los Departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, conllevando a la pérdida de más de 300.000 mil empleos, el cierre de cerca de 40.000 empresas, y los notorios problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos para las cadenas productivas de sectores diversos, como lo fue el avícola.

Tal es el caso de la demandante que, pese a que hizo sendas denuncias y advirtió oportunamente a las autoridades correspondientes de las amenazas y dificultades a las que se enfrentó, no recibió una respuesta eficaz por parte de la Fuerza Pública, lo que devino en una grave afectación por las pérdidas derivadas de la baja producción, la mortalidad de las aves producto del desabastecimiento de insumos y alimentos a causa de los bloqueos, o la disposición final de millares de huevos que no pudieron ser transportados a sus lugares de destino, aunado a los sobrecostos en que se tuvo que incurrir para mantener la operación.

A lo anterior se suman las amenazas que recibieron los trabajadores del gremio, así como a los bienes de la compañía que fueron vandalizados -por ejemplo, vehículos transportadores- que demuestran, una vez más, la incapacidad de la Fuerza Pública para atender las alteraciones del orden público, inclusive para mitigar y/o morigerar el impacto que desde tempranos días del Paro Nacional ya se avizoraba.

En este punto, es preciso mencionar que, de acuerdo con los medios de prueba que se aportan con la demanda, mi representada elevó solicitudes respetuosas ante el otrora Ministro de Defensa, Dr. Diego Molano Aponte, con el ánimo de que interviniera para facilitar el transporte de alimentos y materias primas desde y hacia los lugares donde la demandante desarrolla su operación, pues de prolongarse los bloqueos y cierres viales, la avícola corría el riesgo de extinguirse a causa de la desenfrenada muerte de aves y el desecho de producto listo para ser distribuido, lo que finalmente acaeció. No obstante lo anterior, no se impulsaron medidas tempranas para mitigar las pérdidas que sufrió la empresa.”

Bajo tal contexto, es menester que esta defensa proceda a abordar las siguientes consideraciones:

- **La responsabilidad del Estado por actos violentos o actos de terrorismo desplegados por terceros.**

En Colombia el terrorismo si bien, en su definición y alcance adolece de determinación jurídica, no por ello escapa a las obligaciones que un Estado tiene para con la seguridad de sus ciudadanos¹⁰.

Ahora bien, partiendo del ineludible deber que le asiste al Estado de garantizar la protección de todas las personas residentes en el país; es menester señalar que por vía de esa obligación global (...) *“no le son imputables todos los daños a la vida, a la integridad física o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en la medida que se circunscriben a sus capacidades en cada caso concreto (...) aunque la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si, en efecto, fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le*

¹⁰Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de noviembre de 2017, exp. 46567, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. En esta sentencia se puede encontrar un trazado normativo y analítico de lo que constituye el terrorismo en tiempos de paz y en tiempos de guerra.

correspondían.¹¹ En ese orden de ideas, para que el daño proveniente de actuaciones exógenas le sea imputable al Estado, se requiere que existan razones de derecho que lo vinculen con la garantía de “estándares normativos funcionales fijados por el orden interno e internacional”¹²; de tal manera que el incumplimiento o la desatención de aquellos, acarree el deber de responder, ya sea porque se pudo comprobar una falla del servicio o, en ausencia de esta, la administración con su legítima actividad haya generado un riesgo anormal y excesivo.

En tal sentido, conforme a reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado¹³, la responsabilidad del Estado por actos violentos perpetrados por terceros, procede, bien sea a título de falla del servicio o, de un riesgo excepcional, según se desprenda de los hechos en que se geste el caso. Queda descartado, para tales eventos, la configuración de un daño especial¹⁴, porque dicho título requiere el elemento causal proveniente la intervención positiva, legítima y lícita del Estado, aspecto que no se logra configurar¹⁵.

▪ **La falla del servicio como presupuesto de responsabilidad por daños causados por actos violentos de terceros.**

Sobre cuándo se considera que la falla del servicio opera como fundamento de la reparación en este tipo de eventos, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha establecido los siguientes supuestos: (...) “i) En la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por acción u omisión de agentes estatales; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante); iii) la población blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque; y iv) el Estado omitió adoptar medidas de

¹¹Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de noviembre de 2015, exp. 29274. C.P. Ramiro Pasos Guerrero. En el mismo sentido, ya de antes la Corporación se había pronunciado: ver, entre otras: sentencia del 11 de octubre de 1990 (exp. 5737), de 15 de febrero de 1996 (exp. 9940), de 19 de junio de 1997 (exp. 11.875), de (30 de octubre de 1997 (exp.10.958) y de 5 de marzo de 1998 (exp. 10.303) y, en cuanto a la relatividad de la falla, sentencia del 10 de agosto de 2000 (exp. 11.585).

¹²Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 15 de octubre de 2015, exp. 35194, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

¹³Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, exp. 18.860 C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En esta sentencia se hace todo el balance jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estados por actos violentos de terceros.

¹⁴La Sala Plena de la Sección Tercera, dejó sentado que: “Si bien el instituto de la reparación es una técnica judicial con la que se resarcan los daños antijurídicos de los asociados, siempre será necesario que exista una razón de atribución para imputarle responsabilidad al Estado por los daños padecidos por la víctima, y en el caso del título de imputación del daño especial, debe estar estructurado tanto un vínculo causal como un rompimiento del principio de igualdad, lo que determina su carácter especial y grave, y fundamenta per se la imputación; caso contrario, el juez estaría no solo desconociendo sus límites competenciales sino creando una nueva fuente de responsabilidad del Estado con base exclusivamente en el principio de solidaridad sin un juicio claro de imputación, so pretexto de brindar en sede judicial asistencia y auxilio social, lo cual es ajeno al ámbito de una sede donde se juzga exclusivamente la responsabilidad de una de las partes convocadas al litigio”. Ibid.

¹⁵La Sala Plena se pronunció al respecto, en los siguientes términos: “aunque la causalidad preexiste a la configuración del daño, de todas maneras, permite explicar las razones por las cuales se lo debe imputar al Estado, con lo que no puede estructurarse, en casos de actos de terrorismo, la imputación sin una relación causal válida, pues solo en virtud de esta se puede comprobar la gravedad y especialidad del daño y, por ende, justificar la imputación”. Ibid.

*prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por este.*¹⁶

En términos generales, cuando se trate de actos violentos de terceros, el Estado responde a título de falla del servicio, porque: “i) *haya participado directa o indirectamente en la producción del hecho dañoso, o ii) no hubiere intervenido en el acto o hecho generador del daño, pero este le era previsible, resistible y no adoptó las medidas necesarias e idóneas encaminadas a anticipar, evitar o mitigar el resultado dañoso, pudiendo y debiendo hacerlo.*”¹⁷

▪ **El riesgo excepcional como presupuesto de responsabilidad por daños causados por actos violentos de terceros.**

En ausencia de falla del servicio, se ha considerado que la responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros puede surgir del desarrollo de una actividad estatal que, pese a ser legítima y lícita, representa un riesgo anormal, excesivo y súper erogatorio, en términos de la exposición habitual a la que se enfrenta el ciudadano en su entorno. De esta forma, habrá lugar a aplicar el riesgo excepcional como título de imputación cuando el daño se suscite en el marco de una actividad estatal que entrañe un riesgo mayor al inherente o intrínseco a dicha labor, o que exceda lo razonablemente asumido por el perjudicado.¹⁸

Tratándose de actos violentos cometidos por terceros, la responsabilidad estatal derivada de un riesgo creado, tal como lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado, procede cuando: (...) “*El ataque esté dirigido contra instalaciones oficiales, tales como estaciones de policía, cuarteles del Ejército Nacional -incluso si la fuerza pública reacciona o no violentamente para repeler el acto-, centros de comunicaciones al servicio del Estado, oficinas estatales, redes de transporte de combustible, o también contra personajes representativos del Estado, bajo la consideración que la presencia o ubicación de aquellos blancos en medio de la población civil los convierte en objetivos militares de los grupos armados al margen de la ley en el contexto del conflicto armado o en objetivos de ataque cuando se vive una situación de exacerbada violencia como lo son los estados de tensión o disturbios internos, lo cual pone a los administrados en una situación de riesgo potencial de sufrir daños colaterales por la misma situación desentrañada por la violencia.*”¹⁹ El blanco del ataque debe recaer sobre una organización estatal y debe tratarse de un objetivo claramente identificable como del Estado, pues de lo contrario, se estaría ante ataques indiscriminados contra la población que escapan por completo a toda previsibilidad, frente a los cuales el Estado no compromete su responsabilidad.²⁰

¹⁶Ibid. Ver, además, entre otras tantas, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de julio de 2011, exp. 20112, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

¹⁷Ibid. párr. 14.5

¹⁸Ibid. párr. 15.1. Sobre la diferencia entre riesgo excepcional y riesgo social, ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de diciembre 5 de 2006, rad. 28.459, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, con aclaración de voto del magistrado Mauricio Fajardo Gómez.

¹⁹Ibid. párr. 15.2 y 15.3.

²⁰Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de diciembre de 2003, rad. 12.916 y 13.627. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

▪ **Nociones generales respecto de la responsabilidad del Estado aplicables al caso bajo estudio.**

Cuando se debate la responsabilidad estatal por daños ocasionados por actos violentos perpetrados por un tercero, como en el presente caso que la parte demandante justificó en concreto la atribución de responsabilidad contra cada una de las entidades demandadas, fundamentado en una presunta omisión en las funciones y deberes relativos a la adopción oportuna de medidas en medio de los actos de tipo vandálico y terrorista presentados en el país desde el 28 de abril al 04 de junio de 2021. Se debe verificar *prima facie* la existencia de una falla del servicio, la cual se mira a la luz de los deberes internos, como también, aquellos contraídos en el plano internacional. Descartada aquella, la posibilidad que resta para consolidar la responsabilidad pública, es a través de la verificación de un riesgo excepcional, en los términos ya descritos.

De otra parte, es del caso precisar que concordancia con el artículo 2º de la Constitución, las autoridades “*están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades*”, por lo que, en criterio de la jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso, “[o]mitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional (...)”²¹

En este marco, el Estado no solo debe respetar sino también garantizar los derechos de las personas, lo cual implica asumir conductas tendientes, por un lado, a no ejercer actos violatorios de tales derechos y, por otro, a impedir y tomar las medidas necesarias para que las fuerzas no estatales los respeten. Al respecto, la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado²² ha señalado:

“El artículo 90 de la Constitución prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta norma, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles.

Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia de la Corporación, bajo dos títulos básicos: de responsabilidad subjetiva por falla del servicio y de responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. En todos estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño bien de manera exclusiva, o concurrente con la de la víctima o de un tercero. Tales criterios están vinculados, obviamente, con el desarrollo mismo del Estado y, por lo tanto, podrían ser diferentes. Sin embargo, en todo caso para poder atribuir al Estado un daño se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra del Estado, por haber sido éste su autor, bien por haberlo causado directamente, o por haberlo propiciado.

²¹ Sentencia de 20 de noviembre de 2008, expediente 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

²² Sentencia de 9 de junio de 2010, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, exp. 18536.

Los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables a éste, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección de los asociados; o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y lícita por el Estado (..).

Por lo tanto, los daños sufridos por las víctimas de actos terroristas cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque.”

Ahora bien, cabe destacar que, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado²³, que frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligatorio que en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En este sentido, se ha sostenido que:

"1.- En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una FALLA EN EL SERVICIO.

(...)

"2.- Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, sólo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

²³ Sección Tercera, marzo 8 de 2007, expediente No. 27.434.

“La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como “anormalmente deficiente”.

Así, en estos casos, la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado ha considerado que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida y la seguridad de la víctima, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado²⁴ y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio.²⁵

▪ De la asistencia militar

La ley 1801 de 2016 “*Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana*” establece quiénes son las autoridades de policía y su función principal, dentro de las cuales se encuentran el Presidente de la República, los Gobernadores, Alcaldes y comandantes de estación, subestación, centros de atención inmediata de policía y demás personal uniformado de esta institución, con la misión principal de conocer y solucionar los conflictos de convivencia ciudadana.

A su turno, el artículo 170 de la mencionada ley dispone que la asistencia militar “*es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción (...).*

En ese orden de ideas, la intervención en la garantía, control y contención de la protesta ciudadana está a cargo de la Policía Nacional y solo en casos excepcionales y de forma temporal podrán intervenir las Fuerzas Militares en cumplimiento a una orden presidencial.

De esta manera, la asistencia militar dispone de algunas capacidades de las Fuerzas Militares, conforme a sus roles y funciones, ante las contingencias presentadas y manejo de crisis en líneas de esfuerzo estratégico, con el propósito de **(i)** salvar vidas, **(ii)** restaurar los servicios esenciales, **(iii)** mantener y restaurar la ley y el orden, **(iv)** proteger la infraestructura y propiedad, **(v)** apoyar el

²⁴ Sentencia de 28 de abril de 2010, expediente 18072, C.P. Myriam Guerrero de Escobar: “[p]or consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado [Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre de 2007, expediente 15567, M.P. Enrique Gil Botero]”.

²⁵ Sentencia de 21 de abril de 1994, expediente 8725, C.P. Daniel Suárez Hernández.

mantenimiento o restauración del gobierno local y (vi) apoyar la recuperación social del territorio a solicitud de las autoridades respectivas²⁶; actuaciones e intervenciones que deberán realizarse con la observancia de los principios constitucionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad; priorizando en todo momento el diálogo, mediación y disuasión con personal militar. La ley 1801 de 2016 *“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”* establece quiénes son las autoridades de policía y su función principal, dentro de las cuales se encuentran el Presidente de la República, los Gobernadores, Alcaldes y comandantes de estación, subestación, centros de atención inmediata de policía y demás personal uniformado de esta institución, con la misión principal de conocer y solucionar los conflictos de convivencia ciudadana.

A su turno, el artículo 170 de la mencionada ley dispone que la asistencia militar *“es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción (...)”*.

En ese orden de ideas, la intervención en la garantía, control y contención de la protesta ciudadana está a cargo de la Policía Nacional y solo en casos excepcionales y de forma temporal podrán intervenir las Fuerzas Militares en cumplimiento a una orden presidencial.

Así las cosas, la asistencia militar dispone de algunas capacidades de las Fuerzas Militares, conforme a sus roles y funciones, ante las contingencias presentadas y manejo de crisis en líneas de esfuerzo estratégico, con el propósito de (i) salvar vidas, (ii) restaurar los servicios esenciales, (iii) mantener y restaurar la ley y el orden, (iv) proteger la infraestructura y propiedad, (v) apoyar el mantenimiento o restauración del gobierno local y (vi) apoyar la recuperación social del territorio a solicitud de las autoridades respectivas²⁷; actuaciones e intervenciones que deberán realizarse con la observancia de los principios constitucionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad; priorizando en todo momento el diálogo, mediación y disuasión con personal militar.

- **Consideraciones generales de la asistencia militar en el desarrollo de las protestas sociales presentadas en Colombia durante el año 2021.**

Inicialmente, es menester referir que el 21 de noviembre de 2019 durante las manifestaciones sociales registradas en todo el territorio nacional, se evidenció un incremento de las acciones violentas, restricciones en la movilidad, gobernabilidad y desabastecimiento de algunas ciudades; lo que conllevó a la expedición del Decreto Presidencial No. 2087 del 19 de noviembre de 2019, que buscaba prevenir

²⁶ Concepto Estratégico del Plan del Comando General FF.MM 0120000005505 /IVIDN-COGFM-JEMCO-SEMO-SEMJI-CGDJ3-DIPOI-DIDOP-23.2 del 20 de octubre de 2020.

²⁷ Concepto Estratégico del Plan del Comando General FF.MM 0120000005505 /IVIDN-COGFM-JEMCO-SEMO-SEMJI-CGDJ3-DIPOI-DIDOP-23.2 del 20 de octubre de 2020.

actividades y efectos violentos que pudieran constituirse en abusos a los derechos fundamentales y bienes públicos y privados.

Así mismo, en las protestas que se llevaron a cabo entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021 se presentaron graves alteraciones del orden público en algunas ciudades del territorio nacional, fue así como en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda; en los Distritos de Cali y Buenaventura; y en los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, se originaron actos de violencia, como son el bloqueo de vías de ingreso y salida de municipios y distritos, el bloqueo de vías internas de los municipios y distritos, actos vandálicos y violentos contra la infraestructura pública y privada, tales como el incendio de edificaciones públicas, destrucción de alcaldías y palacios municipales, bloqueo y ataque a las misiones médicas, indebido abastecimiento de bienes de primera necesidad y de bienes e insumos para uso médico, la seguridad ciudadana, la institucionalidad del Estado y se expuso a una grave afectación de la salud de los ciudadanos que residen o habitan dichos municipios o distritos²⁸.

Razón por la cual, el Presidente de la República, como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, desde su función de conservar el orden público en todo el territorio y reestablecerlo precisó que:

“la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá, en coordinación con alcaldes y gobernadores, hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público (...).”

En atención a la orden presidencial, el Ministerio de Defensa Nacional emitió la Circular N° 306 del 7 de mayo de 2021, por medio de la cual estableció que debía cumplirse la asistencia militar dispuesta bajo el marco constitucional y legal, de manera temporal y excepcional, ejecutando las acciones que fueran necesarias para preservar el orden y la garantía de los derechos de todos los colombianos.

Lo anterior, integró diversos esfuerzos técnicos para el desarrollo de productos comunicacionales dirigidos al público interno y externo, con el fin de que la ciudadanía comprendiera el concepto de asistencia militar y el rol que cumplía, en este caso, el Ejército Nacional en el desarrollo de las manifestaciones; para lo cual se emplearon las redes sociales como principal herramienta de comunicación por su alcance y como una manera ágil y dinámica de informar de las actividades de las unidades militares en la coyuntura de la protesta social y así evitar, mitigar o aclarar desinformación o mala información difundida por las mismas redes sociales.

Igualmente, entre las acciones de la comunicación estratégica del Ejército también se destinó un equipo táctico a una de las zonas de mayor concentración y alteraciones violentas que permitió emplear diferentes estrategias y canales de comunicación para informar con oportunidad y claridad, a través del comandante militar del área como vocero, generando mensajes periódicos con la información de orden público en aras mantener informada a la opinión pública.

²⁸ Decreto 575 del 28 de mayo de 2021

Por su parte, las operaciones de ADAC²⁹ en apoyo a la Policía Nacional dejaron como resultado: 6.371 patrullajes en coordinación con PONAL, 8.091 patrullajes en perímetros urbanos, 10.023 dispositivos de seguridad, 436 desbloques de vías realizados, 658 reuniones con gremios; así mismo se prestó protección a las siguientes infraestructuras: 1.397 energéticas, 477 de minería, 2.049 petrolera e hidrocarburos y 4.116 viales³⁰.

Entre otras actividades destacadas se encuentran (i) más de un millón de toneladas entre insumos médicos, alimentos, oxígeno y productos de primera necesidad que se lograron transportar en caravanas custodiadas por más de 190 soldados del Ejército y la Policía, desde y hacia el Valle del Cauca y otras zonas del país³¹; (ii) más de 300 hombres del Ejército escoltaron caravanas de camiones cisterna para abastecer con combustible a Cali y a varios municipios del Valle del Cauca³²; y (iii) se realizó jornada de remoción de escombros en varias zonas de Cali para habilitar el paso de las caravanas de alimentos y medicamentos que ingresan a la ciudad, así como para contribuir al mejoramiento de la movilidad³³.

Finalmente, el 15 de junio de 2021 se logró el desbloqueo total de las vías principales para garantizar el abastecimiento y libre movilidad de los ciudadanos, gracias al acompañamiento respetuoso y de protección en las jornadas de manifestación pública, controlando todos los hechos generadores de violencia por vías de hecho y actos vandálicos, logrando con ello la estabilización de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

▪ Disposiciones normativas y jurisprudenciales de la asistencia militar.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 121 dispone que *“Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.”*

Por su parte los numerales 3 y 4 del artículo 189 ibídem establecen las facultades del Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, entre las cuales puede ordenar la asistencia militar en cualquier tiempo, lo que impone a las Fuerzas Militares la obligación de estar preparados para dar aplicabilidad a este instrumento desde su rol misional.

Finalmente, el artículo 217 dispone que la Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

De otro lado, el artículo 5 de la Ley 489 de 1998 *“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden*

²⁹ Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil

³⁰ Informe de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional en el marco de la Movilización Social https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/PresenMDN_CIDH_paro.pdf

³¹ <https://www.elpais.com.co/valle/ejercito-ha-custodiado-el-trasladode-2-millones-de-toneladas-de-carga-entre-el-cauca-y-el.html>

³² <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-ejercito-acompana-laentrega-de-combustible-en-cali-tras-habilitarse-corredorhumanitario/202127/>

³³ <https://www.semana.com/nacion/articulo/con-asistencia-militarautoridades-confirman-que-mejoro-el-abastecimiento-en-elsuroccidente-del-pais/202102/>

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 oficina 358, complejo Fortaleza Ejército Nacional - Bogotá, D.C.

Teléfono: 3123152205

Mensajería Electrónica: dianablanca03@hotmail.com– diana.blanco@buzonejercito.mil.co

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, consagra la competencia administrativa, esto es que los organismos y entidades deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes que les hayan sido asignadas expresamente por la ley, ordenanza, acuerdo o reglamento ejecutivo.

Así mismo, el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, como ya se indicó, expresa que la asistencia militar es un instrumento legal que puede aplicarse en hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia, del cual solo podrá disponer el Presidente de la República de forma excepcional y temporal por decisión propia o ante las solicitudes realizadas por gobernadores y alcaldes ante la necesidad de aplicarla.

Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C-223 del 20 de abril de 2017 en estudio de una demanda de inconstitucionalidad, entre otros del artículo 56 de la Ley 1801 de 2016 declaró condicionalmente exequible el último inciso en los siguientes términos: *“Las Fuerzas Militares no podrán intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres, salvo los casos en los que excepcionalmente los autoriza la Constitución y la ley”.*

Seguidamente, el Decreto No. 003 del 5 de enero de 2021 *“por el cual se expide el protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana”, en su artículo 36 establece que, en el marco de las manifestaciones públicas, “las Fuerzas Militares no intervendrán en operativos de control y contención, salvo cuando se disponga de la asistencia militar”.*

En ese orden de ideas, el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 *“por el cual se imparten instrucciones para el mantenimiento del orden público”, se expidió en cumplimiento de la orden impartida por el Presidente de la República en alocución presidencial del 1 de mayo de 2021, con ocasión de la alteración del orden público en las protestas iniciadas el 28 de abril de 2021 en gran parte del territorio nacional y mediante el cual indicó que la asistencia militar seguirá vigente en determinados lugares con alto riesgo en la integridad de los ciudadanos; es así como se facultó a determinados gobernadores y alcaldes para que dieran aplicación de la asistencia militar, con el fin de superar los hechos que daban lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia pacífica en sus respectivas jurisdicciones.*

En este punto, es necesario resaltar que la Corte Constitucional en Sentencia C-100 del 17 marzo de 2022, en demanda de constitucionalidad del artículo 170 del mencionado Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, señaló expresamente que:

*“20. A partir de una lectura sistemática de la norma examinada conforme el contexto en el que se encuentra inserta, se colige que la asistencia militar, se constituye en primer lugar, en un **apoyo temporal y excepcional**, que prestan las Fuerzas Militares cuando tienen ocurrencia hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública. Se trata de un apoyo, reitérese, que se*

prestará a las funciones que materialmente le corresponden a la Policía Nacional.
(...)

24. Dado lo anterior, la asistencia militar se delimita por los mismos límites que todos los medios de policía que tienen por objeto el cumplimiento efectivo de la función y actividad de Policía. En ese sentido, tal y como se desarrollará al momento de abordar los cargos, pero que se estima oportuno enunciar en este acápite, el instrumento de asistencia militar se restringe de modo directo por: (i) el derecho internacional de los derechos humanos³⁴ y el texto constitucional; (ii) es evidente que la asistencia militar se desarrolla en el ámbito de la actividad y las órdenes de policía, por tanto, el uso de esa institución, aun cuando se ejerza en apoyo por parte de Fuerzas Militares, debe sujetarse a los límites establecidos frente a su ejercicio en el ordenamiento jurídico y reconocidos por la jurisprudencia de este Tribunal³⁵. (Negritas originales).

Así mismo, consideró que la norma acusada “no se trata de una norma que regule derechos fundamentales, en tanto tal no es su objeto directo o finalidad”, y aunque si podría tener alguna incidencia en el ejercicio de estos derechos, se trataría de un escenario relacionado con el impacto de la aplicación de la asistencia militar, la cual finalmente constituye un apoyo a la labor que desarrolla la Policía Nacional para el restablecimiento de la convivencia cuando “hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública” materializando así, los principios de colaboración y coordinación de entidades públicas consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

Finalmente, el Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela que solicitó la suspensión de los efectos del Decreto 575 de 2021, en relación con la asistencia o acompañamiento militar, por considerar que no se observaron conductas concretas que pudieran inferir en la afectación de los derechos fundamentales.³⁶

Y mediante sentencia del 8 de abril de 2022, radicado 11001-03-24-000-2021-00261-00, la misma Corporación denegó la medida cautelar de suspensión del

³⁴ En la sentencia del 28 de noviembre de 2018, emitida en el caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, la Corte Interamericana reiteró que “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles.” Al respecto, también indicó que “el Estado debe brindar recursos sencillos y expeditos para denunciar la violación de los derechos humanos, así como tales denuncias deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria y no militar, las cuales deberán ser efectivamente investigada y, en su caso, sancionados los responsables.”³⁴ Y, precisó los criterios que deben tenerse en cuenta en aquellos casos que las fuerzas armadas “intervengan en tareas de seguridad”, cuya participación debe ser: a) *Extraordinaria*, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso³⁴; b) *Subordinada y complementaria*, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial³⁴; c) *Regulada*, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad³⁴ y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia³⁴, y d) *Fiscalizada*, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

³⁵ Sentencia C-128 de 2018. En ese sentido, en sentencia C-391 de 2017, la Corte ratificó que “el mismo Código Nacional de Policía y Convivencia establece unos parámetros que sujetan el accionar de las autoridades de policía. En efecto, las autoridades están sometidas al principio de legalidad, en esta medida les está vedado actuar al margen de los procedimientos prescritos en la ley, ya que todo exceso será sancionado (...).”

³⁶ Consejo de Estado, Sentencia del 21 de octubre de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2021-02250-01, acumulados 11001031500020210222400 y 11001031500020210234800

precitado Decreto 575, argumentando que, para controvertir la legalidad del acto administrativo, los accionantes contaban con el medio de control de nulidad.

▪ **Lineamientos internos respecto la asistencia militar, emitidos por el comandante del Ejército Nacional**

Una vez descritos los referentes constitucionales, legales y jurisprudenciales de la asistencia militar, es pertinente indicar que para el desarrollo de este instrumento legal, bajo el direccionamiento del Comando del Ejército Nacional y el Departamento Jurídico Integral, se han emitido entre otros, los siguientes documentos rectores, con el propósito de emitir recomendaciones jurídico-operacionales para el planeamiento, preparación, ejecución y evaluación de tareas de Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil³⁷:

1. Plan N° 00018499 del 20 de octubre de 2020, que emite el Comando del Ejército Nacional para el fortalecimiento de la estrategia de control territorial en contribución a la gobernabilidad y legitimidad con ocasión del paro nacional.
2. Plan N° 00020853, que emite el Comando del Ejército Nacional para el fortalecimiento de la articulación sincronización y coordinación operacional en contribución a la gobernabilidad y legitimidad con ocasión al tercer paro nacional programado a partir del 19 de noviembre de 2020.
3. Plan N° 00014460 del 27 de abril de 2020, que emite el Comando del Ejército Nacional para la articulación, sincronización e integración de las capacidades y responsabilidades de la Fuerza, con ocasión a las protestas pacíficas ciudadanas que se desarrollen en el año 2020 en el territorio nacional, con sus respectivos anexos.
4. Anexo Jurídico al Plan N° 00014460 que emite el Comando del Ejército Nacional para la articulación, sincronización e integración de las capacidades y responsabilidades de la Fuerza, con ocasión a las protestas pacíficas ciudadanas que se desarrollen en el año 2021 en el territorio nacional.
5. Guía de Planeamiento N° 00015062 de mayo del 2021 que emite el Comando del Ejército Nacional para el empleo de las capacidades de la Fuerza, con ocasión de la declaratoria de asistencia militar decretada por el señor Presidente de la República en alocución del 1° de mayo de 2021-
6. Plan N° 00014783 del 2 de mayo de 2021 que emite el Comando del Ejército Nacional para contribuir al restablecimiento de los servicios esenciales y el fortalecimiento de la seguridad sobre los ejes viales en los Departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con sus respectivos anexos.
7. Circular N° 2021247005519003 del 4 de mayo de 2021 sobre los lineamientos, órdenes e instrucciones para el desarrollo del instrumento legal de asistencia militar.

³⁷ Manual Fundamental del Ejército MFE 3-28 "Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil": El Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil se define como el soporte proporcionado por las FF.MM. de Colombia, y todas las instituciones que integran el sector defensa, en respuesta a solicitudes de asistencia de las autoridades civiles para emergencias nacionales de cualquier índole.

8. Plan N° 00015171 del 6 de mayo de 2021 “asistencia militar” que emite el Comando del Ejército Nacional para el empleo de las capacidades de la Fuerza dentro de las tareas de ADAC.
9. Anexo “I” del 10 de mayo de 2021 órdenes adicionales al Plan N° 00015171 sobre la asistencia militar en cumplimiento al plan que emite el Comando General de las Fuerzas Militares para la operalización y aplicación de este instrumento legal.
10. Protocolo del 1° de junio de 2021 para el trámite de acciones constitucionales en el marco de la protesta social y el instrumento legal de asistencia militar.
11. Boletín N° 37 del 1° de mayo de 2021 que emite recomendaciones en los diferentes niveles frente a la figura de asistencia militar.
12. Boletín N° 39 del mayo de 2021 delitos que se pueden configurar y tipificar por afectación del personal militar que participa en asistencia militar.
13. Boletín N° 44 de mayo del 2021 sobre el uso escalonado de la fuerza.
14. Boletín N° 041 del 18 de mayo de 2021 por el cual se emiten recomendaciones en aplicación al uso de la Fuerza.
15. Boletín N° 051 de junio de 2021 sobre la asistencia militar en operaciones terrestres del Ejército Nacional.
16. Boletín N° 054 de junio de 2021 por el cual se aclara jurídicamente la aplicabilidad del instrumento legal de asistencia militar en las operaciones terrestres del Ejército Nacional.
17. Cartilla de educación y entrenamiento CEE 7-28.1 conceptos básicos para operaciones de ADAC en el marco de la asistencia militar, restringido junio 2021.
18. Circular N° 2021249001168411 del 15 de junio de 2021 difusión Circular N° 363 en aplicación del Decreto N° 575 del 28 de mayo de 2021.
19. Circular N° 2021249001145641 del 16 de junio de 2021 apreciación de escenarios sobre el uso o no de la fuerza.
20. Circular N° 2021249001157451 del 16 de junio de 2021 propuesta oficio dirigido a las autoridades territoriales sobre el alcance de la asistencia militar.
21. Circular N° 2022249003428233 del 8 de marzo de 2022 lineamientos generales para la aplicación del instrumento legal de la asistencia militar.
22. Plegable “Derecho Constitucional a la Protesta Social”, año 2022.
23. Video Institucional “Protesta Social en Colombia”, año 2022.

▪ **Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC)**

El apoyo que provee el sector defensa a las autoridades civiles en situaciones de crisis, emergencia o grave perturbación del orden público da una visión más amplia

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 oficina 358, complejo Fortaleza Ejército Nacional - Bogotá, D.C.

Teléfono: 3123152205

Mensajería Electrónica: dianablanca03@hotmail.com– diana.blanco@buzonejercito.mil.co

de las operaciones que las Fuerzas Militares (FF. MM.), específicamente el Ejército Nacional, ofrecen a la Nación.

En este sentido, la institución se ha caracterizado por ser un baluarte fundamental en el desarrollo del país, llevando tranquilidad y alivio a regiones azotadas por el conflicto, y hacer un aporte en situaciones especiales a través de las tareas de apoyo de la defensa a la autoridad civil (ADAC); que son distintas a las otras tareas de la acción decisiva (ofensivas, defensivas y de estabilidad), debido a que las tareas de esta se enfocan en el empleo de medios no letales, en la medida que las condiciones y el ambiente operacional lo permitan, con el fin de salvar vidas, mejorar la calidad de vida, proteger la propiedad (pública y privada) y apoyar la recuperación social del territorio.

Veamos la siguiente figura ilustrativa referente a las tareas de apoyo de la defensa a la autoridad civil (ADAC)

DEFINICIÓN	El apoyo de la defensa a la autoridad civil se define como el soporte proporcionado por las Fuerzas Militares de Colombia y todas las instituciones que integran el sector defensa, en respuesta a solicitudes de asistencia de las autoridades civiles nacionales para emergencias domésticas de cualquier índole, apoyo a la imposición de la ley y otras actividades con entidades calificadas para situaciones especiales.
PROPÓSITOS	1) Salvar vidas. 2) «Restaurar los servicios esenciales. 3) «Mantener o restaurar la ley y el orden. 4) Proteger la infraestructura y propiedad (pública y privada). 5) «Apoyar el mantenimiento o restauración del Gobierno local. 6) «Configurar el ambiente operacional para el éxito interagencial. 7) Apoyar la recuperación social del territorio.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES	1) El marco jurídico define como el Ejército Nacional apoya a las autoridades civiles. 2) Las autoridades civiles están a cargo y las Fuerzas Militares las apoyan. 3) El Ejército Nacional termina la misión cuando las autoridades civiles puedan continuar sin apoyo militar y se deben documentar todos los costos. 4) «Las capacidades y limitaciones deben ser entendidas por las autoridades civiles.
TAREAS PRIMARIAS	• Proporcionar apoyo a las instituciones civiles nacionales encargadas de hacer cumplir la ley • Proporcionar apoyo para atender incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN). • Proporcionar apoyo en incidentes internos sin importar la causa, el tamaño o la complejidad. • Proporcionar otro apoyo designado.

Se precisa, el Ejército apoya a las autoridades civiles mediante la realización de tareas de apoyo de la defensa a la autoridad civil como parte de la acción decisiva. Puntualmente, esta clase de tareas se define como el soporte proporcionado por las Fuerzas Militares de Colombia y todas las instituciones que integran el sector defensa, en respuesta a solicitudes de asistencia de las autoridades civiles nacionales para emergencias domésticas de cualquier índole, apoyo a la imposición de la ley y otras actividades con entidades calificadas para situaciones especiales.

En este sentido, el apoyo tiene dos propósitos: garantizar que las autoridades logren aplicar las leyes vigentes en una situación de emergencia para restaurar la gobernabilidad y ayudar a restablecer los servicios básicos de la población para mejorar su calidad de vida. Esto se logra en coordinación con la autoridad civil competente por medio de la acción unificada.

▪ **Análisis del caso bajo estudio.**

Precisado lo anterior, corresponde analizar la imputación de la responsabilidad al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, a causa de la afectación sufrida por la Incubadora Santander S.A. representante de la marca Huevos Kikes®, en el marco

PATRIA HONOR LEALTAD

de la protesta social realizada en el país a partir del 28 de abril de 2021, que se precisan así: *“pérdidas derivadas de la baja producción, la mortalidad de las aves producto del desabastecimiento de insumos y alimentos a causa de los bloqueos, o la disposición final de millares de huevos que no pudieron ser transportados a sus lugares de destino, aunado a los sobrecostos en que se tuvo que incurrir para mantener la operación. A lo anterior se suman las amenazas que recibieron los trabajadores del gremio, así como a los bienes de la compañía que fueron vandalizados -por ejemplo, vehículos transportadores.”*

Bajo tal contexto, debemos referir que durante el año 2021 la Tercera Brigada del Ejército Nacional (con sus Unidades Subordinadas: Batallón de Alta Montaña No. 3 – BAMRO, Batallón de Alta Montaña No. 10 – BAMOG, Batallón de Infantería No. 23 – BIVEN, Batallón de Ingenieros de Combate No. 3 – BICOD, Batallón de Policía Militar No. 3 – BAPOM, Batallón de Artillería de Campaña No. 3 – BAACA y Grupo Gaula Militar Valle – GGVAL) tenía la responsabilidad operacional en el departamento del Valle del Cauca en 40 municipios del departamento con excepción de los municipios de Alcalá, Ulloa y el área urbana de Buenaventura que correspondían a la Quita División y a la Fuerza Naval de Pacífico respectivamente.

A partir del día 28 de abril de 2021 se presentaron una serie de marchas y protestas sociales que, debido a la infiltración por Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Común, derivaron en serias alteraciones del orden público que se tradujeron en actos vandálicos a infraestructura pública y privada y bloqueos a vías nacionales y regionales que condujeron a un desabastecimiento de bienes básicos para la población civil y una alteración en el normal desarrollo de las actividades propias de la población civil y las instituciones del Estado.

Es por ello, que el Comando de la Tercera Brigada del Ejército Nacional emitió el Plan Operacional No. 015185³⁸ a través del cual se impartieron instrucciones a las tropas de la Tercera Brigada con el fin de dar respuesta a la solicitud de asistencia de las autoridades civiles del Departamento del Valle del Cauca para la emergencia doméstica en apoyo a la imposición de la ley y demás actividades presentadas con ocasión a los bloqueos, disturbios y acciones violentas.

El 1 de mayo de 2021 el señor Presidente de la República dio aplicación al artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 referente a la Asistencia Militar, la cual como ya se referenció es *“el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”*.

Conforme lo anterior, a partir del 02 de mayo de 2021 la Tercera Brigada por intermedio de sus Batallones Orgánicos y Unidades agregadas operacionalmente, desarrollaron tareas de Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil – ADAC en el marco de la Asistencia Militar, dentro de una misión de apoyo humanitario con la cual se tuvo como propósitos principales: salvar vidas, restaurar servicios esenciales, mantener o restaurar la ley y el orden, proteger la infraestructura y propiedad (pública y privada), apoyar el mantenimiento o restauración del Gobierno local,

³⁸ El mencionado Plan de Operaciones, así como sus anexos y actualizaciones gozan de clasificación de seguridad “Pública Reservada y/o Secreta” razón por la cual se solicitará al Despacho de conocimiento que ordene el levantamiento de la reserva legal.

configurar el ambiente operacional para el éxito interinstitucional y apoyar con la recuperación social del territorio.

De esta manera las tareas ADAC desarrolladas por la Tercera Brigada en su área de responsabilidad se enfocaron en lograr la recuperación de la cadena de producción, asegurando la movilidad terrestre, protegiendo los activos estratégicos del Estado y a la población, garantizar el ejercicio de las libertades ciudadanas y restableciendo el orden público en el marco de situaciones de manifestación violenta por hechos de grave alteración de seguridad y la convivencia, las cuales se pueden resumir en las siguientes actividades:

- Seguridad activos estratégicos
- Patrullas motorizadas
- Apoyo en desbloques
- Seguridad transporte de carga
- Rutas de apoyo escoltas de combustible
- Rutas de apoyo escoltas relleno sanitario

Teniendo en cuenta que el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 determina que el Ejército Nacional coordinará e integrará sus capacidades con la Policía Nacional, la Tercera Brigada participó de forma permanente en los distintos Consejos de Seguridad y Puestos de Mando Unificados realizados a partir del 28 de abril de 2021.

Conforme lo anterior, se tiene que la asistencia militar es un instrumento legal que ha venido siendo utilizado en los últimos tiempos por la dinámica propia del conflicto en las protestas sociales, las cuales exigen una mayor intervención coordinada de las autoridades administrativas para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado.

Es por ello que el Ejército Nacional, como una de las Fuerzas Militares está llamado en cualquier tiempo, a dar cumplimiento a la figura de la asistencia militar desde su rol misional, siempre y cuando medie orden presidencial.

Expuesto lo precedente, no puede desconocerse que, por las mutaciones del conflicto, como se ha visto en los últimos años, el uso de esta figura excepcional puede darse con mayor frecuencia y es frente a este escenario que el Ejército Nacional ha desarrollado medidas preventivas para orientar la intervención estatal, y evitar que se presenten daños por la acción u omisión de sus agentes.

Es así como en materia operacional, en el marco de la protesta social del año 2021, la estrategia interna se originó a partir de la emisión de lineamientos a través de diferentes boletines técnicos para unificar el mensaje a todos los Comandantes de las unidades operativas. Adicionalmente incluyó la coordinación con el Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional para la capacitación, a todos los miembros de la institución acerca de las acciones que se les permitían a los militares en el marco de la asistencia militar.

Este trabajo de comunicación coordinado desde el nivel superior permitió que el desarrollo de las operaciones militares, así como las misiones asignadas a las Unidades del Ejército en el marco de la asistencia militar, gozara de transparencia,

legitimidad y respaldo de los colombianos; logrando esto, a través de la visibilización permanente de las capacidades y acciones que realiza la Fuerza en este escenario.

Igualmente y con ocasión de las actividades desplegadas por el Ejército Nacional en el marco de la asistencia militar, debe tenerse en cuenta que los medios de comunicación y en especial las redes sociales difundieron una serie de noticias falsas (fake news) orientadas a deslegitimar la institucionalidad y generando confusión en los ciudadanos³⁹; es así que para la fecha de los hechos, a través de 21.675 horas de ciberpatrullaje se detectaron 104 eventos cibernéticos, 154 noticias falsas, se identificaron más de 7.000 cuentas de trolls⁴⁰ en redes sociales, se generaron 3.420 alertas preventivas para la anticipación de actos de vandalismo, se analizaron 3.723 videos para identificación de los responsables y se abrieron 9 procesos de investigación⁴¹

En este punto es importante mencionar que, el Ejército Nacional mediante las diferentes operaciones militares, así como su intervención con la asistencia militar en operaciones estratégicas que se llevaron a cabo por la afectación del orden público en las protestas llevadas a cabo en el año 2021, buscó proteger y propender por el cumplimiento de la misión constitucional y legal, específicamente en aquellas zonas donde fue desbordada la capacidad de la Policía Nacional; sin embargo esta protección tiene unos límites de capacidades físicas y logísticas en razón a la gravedad de la situación, por tanto varios hechos se hubiesen podido tornar imprevisibles e irresistibles a las capacidades de la entidad.

Así las cosas, no puede atribuirse a la entidad la calidad de garante de un riesgo concreto que no conocía con precedencia y en esa medida no puede predicarse que haya quebrantado alguna obligación de diligencia, cuidado y protección de las movilizaciones sociales y los disturbios que en ellas se hubiesen podido ocasionar, más aún cuando la entidad no tenía bajo su resorte la capacidad de acción y contención de las personas participantes en las protestas y en ese sentido, frente al daño antijurídico no ostentaba la posición de garante que lo obligara a evitar el resultado dañoso.

Se concluye entonces que, para deducir la responsabilidad Estado por sus hechos u omisiones, deben reunirse tres condiciones a saber: Un hecho imputable a la administración, un daño o perjuicio indemnizable y la relación de causalidad entre el

³⁹ Ver ejemplos de noticias falsas en el siguiente enlace: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/pccshrcontent/Recursos%20MDN/Plantillas%20Documentos/Ministerio/CentroDocumentos/Generales/Recursos/INFORME_DEFENSA_GarantiasManifestacion.pdf correspondiente a las Garantías a la manifestación pacífica y control de acciones violentas. Periodo 28 de abril a 4 de junio de 2021 del Ministerio de Defensa.

⁴⁰ persona con identidad desconocida que publica mensajes provocadores, irrelevantes, polémicos o fuera de tema en una comunidad en línea, ver [https://es.wikipedia.org/wiki/Trol_\(Internet\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Trol_(Internet))

⁴¹ En el caso particular de la Tercera Brigada, el Batallón de Policía Militar No. 3 dio apertura a la Indagación Disciplinaria No. 071 – 2021 con ocasión a informe realizado por el señor patrullero de la Policía Nacional Miguel Ordoñez, donde presuntamente unos soldados del Ejército que se encontraban prestando apoyo en la seguridad de las manifestaciones en el municipio de Yumbo, estarían entregando elementos no identificados a los manifestantes. Actualmente la investigación se encuentra archivada y se anexan cien (100) folios.

A su vez, el Gaula Militar Valle dio apertura a la Indagación Disciplinaria No. 008 – 2021 con ocasión a hechos ocurridos el día 28 de mayo de 2021 cuando se encontraban prestando seguridad en el monumento a los héroes en la glorieta del barrio Ciudad Jardín, manifestante atacan con piedras u fuegos pirotécnicos el CAI por lo cual el personal militar se acerca a fin de estar pendientes de la situación de forma disuasoria, momento en el cual se acerca un ciudadano y acciona un arma al parecer traumática en contra de los manifestantes, lo cual se informa a la Policía y proceden a retirarse del sitio. Actualmente la investigación se encuentra archivada y se anexan setenta y cinco (75) folios.

hecho y el daño; por tanto, se requiere que comprobadas las circunstancias que rodearon la actuación, sea posible llegar a afirmar sin lugar a dudas que ese daño, fue netamente responsabilidad de la entidad; ahora, para liberarse de esa responsabilidad, le compete a la administración demostrar una causal eximente de responsabilidad que permita aseverar la falta de causal endilgable a la Institución porque su actuación fue oportuna y eficiente, o por lo menos desplegada con toda la diligencia y cuidado que eran necesarios, o que la causación del daño incidió en forma determinante y única de la culpa de la víctima, el hecho de un tercero o una fuerza mayor.

Bajo tal contexto, esta defensa considera que en casos como el objeto de estudio donde la generación del daño es ocurrido a causa de una afectación propiciada por actores ilegales; es necesario tener como referente a la Constitución Política de Colombia, con el fin de considerar que la obligación positiva que asume el Estado de asegurar a todas las personas residentes en Colombia, y la preservación de sus derechos, no se encuentra clasificada como una obligación de resultado sino de medio, por virtud de la cual son llamadas las distintas autoridades públicas a establecer las medidas de salvaguarda que dentro de los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes, a fin de evitar la lesión o amenaza de los derechos fundamentales.

Es así que, con relación a los deberes normativos a cargo del Estado, nuestra Constitución Política – artículo 2º, define dentro de los fines esenciales del Estado el asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, para lo cual se instituyeron las autoridades públicas, con el propósito fundamental de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, postulado que, en relación con el Ejército Nacional fue desarrollado mediante el artículo 217 superior, al contemplar: *“Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.”*

En ese orden de ideas, para el caso bajo estudio tenemos que, no está acreditado que el Ejército nacional hubiera omitido sus obligaciones dentro del marco de sus funciones, en la medida de que tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, a pesar que es deber del estado brindar protección y seguridad a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños causados por terceros a la vida o a los bienes, porque las obligaciones del estado son relativas, en tanto limitadas por las capacidades establecidas en cada caso concreto⁴², por cuanto nadie está obligado a lo imposible; resultando así en los casos que se alega que la falla del servicio se originó en la omisión de la administración en la prestación de un servicio o en el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado, no solo que la integridad de las personas y/o su bienes sufrió un detrimento, sino que este se derivó de un hecho que, aun cuando era previsible, no fue evitado; lo cual, no está demostrado en el plenario, toda vez que, no existe relación de causalidad entre el hecho dañino y algún incumplimiento de los deberes que le asistían a la entidad.

En este punto, es necesario aclarar que las obligaciones derivadas de los artículos 2º y 217 de la Constitución Política no son absolutas. Además, la primera disposición

⁴² Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de noviembre de 2015, exp. 29274. C.P. Ramiro Pasos Guerrero.

normativa como fuente de obligación es un principio que guía el actuar de la Administración, y por lo tanto al ser de carácter general, no puede ser utilizado para imputar en forma particular un incumplimiento obligacional a cargo de determinada entidad.

De acuerdo con el lineamiento anterior, habrá de entenderse entonces, tal y como lo ha dejado establecido el Consejo de Estado, que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2°, en lo que respecta a las obligaciones que están a cargo del Estado y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión, han de mirarse para el caso particular; en la medida de que se le exige a la Administración la utilización adecuada de todos los medios de que está provista en orden a cumplir el cometido constitucional, y **si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el mismo ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.**

Que, la misión del Ejército Nacional es conducir operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación; obligación frente a la cual no está debidamente demostrado un incumplimiento, por cuanto: **(I)** la causa inmediata de los hechos dañinos que generaron afectación a la Incubadora Santander S.A., fue el actuar de Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Común, quienes infiltraron las protestas sociales que se desarrollaban a partir del 28 de abril de 2021, causando alteraciones del orden público que se tradujeron en actos vandálicos a infraestructura pública y privada y bloqueos a vías nacionales y regionales que condujeron a un desabastecimiento de bienes básicos para la población civil y una alteración en el normal desarrollo de las actividades propias de la población civil y las instituciones del Estado. **(II)** que, por parte del Ejército Nacional en conjunto con la Policía Nacional, conforme sus capacidades se realizaron acciones interinstitucionales con el fin de garantizar principalmente la seguridad y salvaguarda de los derechos de la ciudadanía colombiana en el lapso de tiempo comprendido entre el 28 de abril al 04 de junio de 2021, lo cual se encuentra reflejado en desarrollo de operaciones militares **(III)** que nos encontramos frente a la causal exonerativa de responsabilidad del **HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO**⁴³, materializada en los actos vandálicos y terroristas causados por

⁴³Al respecto, en sentencia del veintiséis (26) de marzo de dos mil ocho (2008) Radicación número: 85001-23-31-000-1997-00440-01(16530), la sección tercera del Consejo de Estado, precisó: *"En relación con la causal de exoneración consistente en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la misma se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado en manera alguna con la actuación de aquél, de manera que se produce la ruptura del nexo causal; además, como ocurre tratándose de cualquier causa extraña, se ha sostenido que la misma debe revestir las características de imprevisibilidad e irresistibilidad antes anotadas, más allá de la consideración de acuerdo con la cual ha de tratarse de una conducta ajena a la de la entidad pública demandada. Adicionalmente, no puede perderse de vista que para que el hecho del tercero pueda ser admitido como eximente de responsabilidad no se precisa que sea culposo, sino que constituya la causa exclusiva del daño. En criterio de la Sala, el concepto que subyace a las posiciones tanto doctrinales como jurisprudenciales recién referidas es, precisamente, el atrás explicado de la exterioridad de la causa extraña, entendida como la exigencia predicable de ésta para que pueda tener virtualidad liberatoria de responsabilidad, en el sentido de que el acontecimiento o circunstancia que el demandado invoca como causal exonerativa debe resultar ajeno jurídicamente, es decir, que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder, más allá de que, desde el punto de vista estrictamente físico o fenomenológico, se trate de un suceso en el cual la entidad accionada o alguno de sus agentes no haya tenido intervención directa y de que, en consecuencia, no hayan tomado parte, en manera alguna, en el proceso de causación física del daño, lo cual quiere significar que pueden darse eventos como, de hecho, ha ocurrido en el sub judice en los*

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 oficina 358, complejo Fortaleza Ejército Nacional - Bogotá, D.C.

Teléfono: 3123152205

Mensajería Electrónica: dianablanca03@hotmail.com– diana.blanco@buzonejercito.mil.co

actores ilegales, circunstancia exonerativa que impide estructurar la imputación en contra de la entidad, elemento indispensable para poder deducir responsabilidad extracontractual respecto del Estado.

Ahora bien, es pertinente señalar que la jurisprudencia, ha considerado: *“En consecuencia, considera la Sala que a pesar de que la violencia desatada por las organizaciones delincuenciales para esa época constituía un hecho notorio, no hay lugar a condenar al Estado en el presente caso, porque éste no era previsible. Las medidas de seguridad se reforzaron en relación con los sitios y personas que se consideraron más vulnerables y no puede calificarse como falla del servicio el no haber extendido esas medidas al resto de la población, porque una actuación de este tipo no era posible. Por lo tanto, no se hizo otra cosa que disponer de los recursos humanos y logísticos con que se contaba para proteger a la población, brindando seguridad donde se consideró que existía mayor riesgo.”⁴⁴*

Bajo tales lineamientos, esta defensa no desconoce que la violencia desatada en el país en el interregno comprendido entre el 28 de abril al 04 de junio de 2021, fue un hecho notorio y latente; sin embargo, **debe entenderse que el cumplimiento de las obligaciones constitucionales debe darse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias, tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc.**, para atender la prestación del servicio que en un momento dado se requiera, tal y como se demostró que se realizó en el presente asunto.

Como sustento de lo anterior existe diferente material probatorio que permite dar cuenta que, por parte del Ejército Nacional en conjunto con la Policía Nacional, se sostuvo una participación activa y ejecutaron planes de acción en la medida de sus posibilidades, capacidades y medios, para garantizar principalmente la seguridad y protección de los derechos de la ciudadanía colombiana, siempre en miras de evitar y menguar el accionar de los grupos ilegales, que afectaron el derecho legítimo de protesta. Por cuanto, la institucionalidad siempre hizo presencia en todo el país, en la medida de sus posibilidades en cuanto el número de miembros de la Fuerza Pública, salvaguardando la población en general, ya que dadas las circunstancias especiales en materia de orden público que presentaba el país, se hacía imposible suplir atenciones particulares y concretas como la que demanda la parte actora.

Conjuntamente, es importante referir que los hechos por los cuales se presentaron los desmanes y los bloqueos de vías en el desarrollo de la protesta social del año 2021, son ajenos al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por cuanto fueron perpetrados por actores ilegales. En consecuencia, estamos en el presente caso frente a las actuaciones atribuibles a terceros diferentes al Estado.

Así mismo, se evidencia que no ha existido una actuación antijurídica atribuible a la administración en la producción del daño. Como quiera que se puede concluir que la actuación del Gobierno Nacional, autoridades del orden nacional, departamental, municipal y Fuerza Pública estuvo dentro del respeto de las garantías

cuales si bien es cierto que la producción física del daño obedece a la actuación de un tercero, no lo es menos que la lesión resulta jurídicamente imputable, por razones de diversa índole, a la acción o a la omisión de una autoridad pública.”

⁴⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2002 reiterada en sentencia del 9 de junio del 2010.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 oficina 358, complejo Fortaleza Ejército Nacional - Bogotá, D.C.

Teléfono: 3123152205

Mensajería Electrónica: dianablanca03@hotmail.com– diana.blanco@buzonejercito.mil.co

constitucionales tanto a los protestantes del paro nacional y de otra parte realizando todas las labores de orden constitucional y legal para atenuar los efectos adversos que generó el actuar de Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Común; por cuanto de una parte, está demostrada la presencia de la Fuerza Pública y la Policía Nacional, en todo el territorio nacional y de otra, los esfuerzos que se realizaron por parte de la institucionalidad para concertar de manera dialogada una terminación definitiva del paro nacional mediante acuerdo entre todas las partes.

En ese orden de ideas, es dable afirmar que la parte demandante no demostró, entonces, que la conducta exigible de las demandadas fuera diferente a la efectivamente desplegada, en consideración de sus deberes constitucionales y legales, de las circunstancias concretas del caso y de los medios con los que se contaba y que tales incumplimientos del contenido obligacional en particular hubieren sido la causa de los daños alegados. En consecuencia, ante tal ausencia de prueba, no es posible concluir que se hubiera incurrido en falla alguna.

De cara al régimen objetivo de responsabilidad bajo el fundamento del riesgo excepcional, resulta claro que conforme lo ha indicado el Consejo de Estado⁴⁵, este se configura si la actividad del Estado es, legítima y riesgosa, y el daño es producto de la concreción del riesgo que ella conscientemente crea para el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales asignados. En ese orden de ideas, tenemos que en el caso objeto de análisis, no se encuentra debidamente demostrado el riesgo anormal o superior causado por mi representada que se pudiera constituir como una causa eficiente del daño, considerando que los hechos acaecieron fue el actuar de Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Común, quienes infiltraron las protestas sociales que se desarrollaban a partir del 28 de abril de 2021, causando alteraciones del orden público que se tradujeron en actos vandálicos a infraestructura pública y privada y bloqueos a vías nacionales y regionales que condujeron a un desabastecimiento de bienes básicos para la población civil y una alteración en el normal desarrollo de las actividades propias de la población civil y las instituciones del Estado. Hechos frente a los cuales el Ejército Nacional, cumplió sus deberes constitucionales, según la disposición del personal, medios y capacidad de maniobra, considerando la crisis generalizada en el país.

De otra parte, para esta defensa resulta cuestionable que el Estado colombiano deba asumir la responsabilidad de todos los perjuicios derivados de la violencia; toda vez que, si bien las Fuerzas Militares se encuentran instituidas para garantizar la vida e integridad de los coasociados, no debe desconocerse que su accionar se encuentra limitado conforme las medidas de salvaguarda que dentro de los conceptos de **razonabilidad y proporcionalidad** resulten pertinentes, a fin de evitar afectaciones como las sufridas por la Incubadora Santander S.A. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que, durante la protesta social del año 2021, el Ejército Nacional, cumplió el deber que les asistía en virtud de sus obligaciones, solo con el único fin de salvaguardar el interés general para garantizar la seguridad nacional, conservación de la seguridad y el orden, o la protección de los habitantes del territorio nacional; destacándose en tal sentido, que el Ejército Nacional tomó las medidas de precaución, contención y defensa que tenían a su alcance para minimizar o en su defecto, evitar que se materializaran los actos terroristas.

⁴⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 18001233100019980000301 (28223), ago. 31/17, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Además, el Ejército Nacional en el desarrollo de una misión, asume obligaciones de medio y no de resultado, las cuales no se tornan absolutas en el sentido de impedir cualquier consecuencia adversa, es así que, frente a hechos relacionados con ataques indiscriminados que inmiscuyen a la población civil por parte de grupos al margen de la ley, el proceder del personal militar es adoptar las medidas de reacción necesarias para evitar daños mayores, siempre propendiendo por garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales establecidos para la entidad; máxime que se desplegó y utilizó la totalidad de la capacidad humana, logística y operacional, con la mantener el orden constitucional y restablecerlo en aquellos lugares en los cuales resultó alterado. En este punto, debe considerarse especialmente que, pese a la utilización máxima de las capacidades del Ejército Nacional, la dimensión de la alteración del orden público desbordada las capacidades de la institucionalidad, lo que hacía imposible evitar que se consumaran afectaciones como las documentadas.

En conclusión, este extremo procesal considera que no se dan los supuestos para que se endilgue responsabilidad a mi representada, teniendo en cuenta que, no se observa que se configure una falla en el servicio, al no acreditarse la omisión frente al deber de vigilar y brindar seguridad a los bienes jurídicamente protegidos de la parte demandante, o que ello hubiese sido la causa desencadenante del daño, cuya indemnización se reclama; ni tampoco está probado que el Ejército Nacional haya sometido a la Incubadora Santander S.A. a una carga o riesgo excepcional, grave y anormal. Aunado a que se encuentra acreditada la estructuración de la causal eximente de responsabilidad **HECHO DE UN TERCERO**.

En consecuencia, respetuosamente solicito Honorable Magistrada que se **NIEGUEN** las pretensiones de la demanda, en la medida que no se encuentran debidamente configurados los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

IV. PRUEBAS

1. Documentales.

1.1 Aportadas.

Solicito a su señoría, otorgarles el valor probatorio a los siguientes documentos:

1.1.1 Oficio radicado No. 2024603003866243:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV03-BR3-B11-1.4 del 19 de febrero de 2024, suscrito por el Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, mediante el cual se aporta información y documentación de tipo operacional y administrativa, relacionada con los hechos de la demanda, y sus antecedentes.

1. 2. Solicitadas.

1.2.1 Que se requiera al Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, con el fin de que allegue al presente proceso, copia digital del Plan Operacional No. 015185, así como sus anexos y actualizaciones. De igual forma, el registro documental que obre en los archivos operacionales de la unidad, en relación con los diferentes Consejos

de Seguridad y Puestos de Mando Unificados realizados a partir del 28 de abril de 2021, en el marco de la protesta social desarrollada en Colombia para tal fecha.

Lo anterior, considerando que conforme lo señalado en el oficio radicado No. 2024603003866243:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV03-BR3-B11-1.4 del 19 de febrero de 2024, estos elementos de prueba gozan de clasificación de seguridad "**Pública Reservada y/o Secreta**".

2. De las pruebas solicitadas por la parte demandante.

En virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 2080 de 2021 y el artículo 228 del Código General del Proceso, a efectos de realizar la contradicción del "*DICTAMEN PERICIAL DE PARTE DE CONTENIDO FINANCIERO Y CONTABLE, elaborado por la firma J.M. NOGUERA & CIA., que tiene como objetivo principal la determinación y/o cuantificación del perjuicio económico que ha sufrido la demandante, INCUBADORA SANTANDER S.A., como consecuencia de los bloqueos que se generaron a raíz del Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril del 2021*". Solicito respetuosamente al Despacho que se disponga la comparecencia del perito **JUAN MANUEL NOGUERA ARIAS**, a la audiencia respectiva.

V. ANEXOS

- Los enunciados como pruebas.
- Poder conferido para actuar.

VI. NOTIFICACIONES

La suscrita apoderada de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**, recibirá notificaciones a los correos: dianablanca03@hotmail.com – diana.blanco@buzonejercito.mil.co - dirección física: Carrera 54 # 26-25 oficina 358, complejo Fortaleza Ejército Nacional - Bogotá, D.C.

Con respeto,



DIANA JULIET BLANCO BERBESI

Profesional de Defensa MDN - Ejército Nacional

C.C No. 1.090.419.440 de Cúcuta

T.P. No. 238.611 del C. S. de la J

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 54 # 26-25 oficina 358, complejo Fortaleza Ejército Nacional - Bogotá, D.C.

Teléfono: 3123152205

Mensajería Electrónica: dianablanca03@hotmail.com– diana.blanco@buzonejercito.mil.co